

Editorial

La Discapacidad afecta a un 9% de la población española. Hasta hace pocos años, la esperanza de vida de este sector de ciudadanos estaba muy por debajo de la media del resto de la población pero los avances en el mundo de la tecnología y de la medicina han tenido como consecuencia el aumento de la esperanza de vida de estas personas que sin la intervención de los poderes públicos estarían abocadas a sufrir discriminación en razón de esta doble causa de vulnerabilidad.

DISCAPACITADOS QUE ENVEJECEN

El conocimiento de este fenómeno social, relativamente reciente, hace que la sociedad se tenga que enfrentar a un nuevo reto: el de las personas discapacitadas que envejecen y el de sus familias, hasta hace poco único apoyo con el que los afectados contaban, que también están sometidas al proceso de envejecimiento y a la evolución de las estructuras familiares tradicionales. Las familias españolas no han sido ajenas al proceso evolutivo que dista mucho de ser el modelo clásico de familia predominante en nuestro país hasta hace relativamente poco tiempo. En la actualidad, las familias son mucho más reductas, hay un aumento progresivo de hogares monoparentales, las viviendas son más pequeñas que en décadas anteriores, la movilidad de los miembros de la familia ha aumentado y una de las consecuencias de este cúmulo de circunstancias es que el individuo, la familia y en definitiva la sociedad tienen que adaptarse a la nueva situación.

Las políticas de atención a este colectivo que ya está siendo abordadas desde los servicios sociales con un índice de cobertura que no es todo lo elevado que sería deseable, necesi-

tan un enfoque multidisciplinar en el que se involucren profesionales de los más diversos ámbitos. Es preciso establecer sinergias entre gerontólogos, médicos, rehabilitadores, profesionales de la discapacidad y el envejecimiento, arquitectos, urbanistas, sociólogos, psicólogos, cuidadores, terapeutas ocupacionales, instituciones y organizaciones asociativas para que con el intercambio mutuo de experiencias y conocimientos se alumbren las soluciones que este fenómeno emergente necesita.

En este sentido, es preciso mencionar la iniciativa de realización del Congreso Internacional “Discapacidad y Envejecimiento”, promovido por el Gobierno del Principado de Asturias y coorganizado por FASAD y el IMSERSO, celebrado recientemente, en donde se ha facilitado un foro para la reflexión y en el debate entre especialistas, profesionales, asociaciones e instituciones que han tenido ocasión de intercambiar experiencias enriquecedoras.

Asimismo, dentro de la discusión y negociación de la nueva estrategia de acción sobre el envejecimiento que se aprobará en la II Asamblea Mundial de Envejecimiento a celebrar en Madrid el próximo mes de abril, tanto el Gobierno español como los países de la Unión Europea han promovido el debate y la adopción de medidas en relación al sector de los discapacitados que envejecen.

Pero todo este trabajo en común de los diferentes agentes tiene que ir necesariamente acompañado por la coordinación entre las distintas administraciones públicas, la dotación presupuestaria imprescindible para acometer la puesta en marcha de recursos y el seguimiento de las recomendaciones sobre el envejecimiento de las personas con discapacidad del Consejo de Europa.

Sin todas estas políticas de actuación no conseguiremos liberar a las personas con discapacidad de ese doble riesgo que supone su pertenencia a dos grupos vulnerables, el de las personas mayores y el de las personas con discapacidad.